Castilla-La Mancha

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

CUERPO: SUPERIOR
ESPECIALIDAD: JURÍDICA

PROCESO SELECTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL CUERPO SUPERIOR ESPECIALIDAD JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 8 de noviembre de 2024
(D.O.C.M. número 221, de 14 de noviembre de 2024)

En Toledo, a 8 de febrero de 2025

1. **El acto jurídico de las instituciones de la Unión Europea que obliga a los Estados miembros destinatarios en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades de estos últimos la elección de la forma y de los medios, se denomina:**
   a) Reglamento.
   b) Directiva.
   c) Dictamen.
   d) Recomendación.

2. **El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:**
   a) No incluye previsión expresa alguna sobre el concepto de ciudadanía de la Unión Europea.
   b) Atribuye la ciudadanía de la Unión Europea a toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro o resida legalmente en el mismo.
   c) Atribuye la ciudadanía de la Unión Europea únicamente a las personas que ostenten la nacionalidad de un Estado miembro.
   d) Atribuye la ciudadanía de la Unión Europea a toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro del Consejo de Europa.

3. **Conforme al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ostenta competencia exclusiva en materia de:**
   a) Protección del medio ambiente y de los ecosistemas.
   b) Asociaciones.
   c) Régimen minero y energético.
   d) Protección y tutela de menores.

4. **Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la iniciativa para su reforma corresponde:**
   a) Exclusivamente al Consejo de Gobierno o a las Cortes de Castilla-La Mancha.
   b) Únicamente al Gobierno de España y a las Cortes Generales.
   c) Solamente a las Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una cuarta parte de sus miembros.
   d) Al Consejo de Gobierno, a las Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una cuarta parte de sus miembros, así como al Gobierno de España y a las Cortes Generales.

5. **De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, son órganos directivos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:**
   a) Las Delegaciones provinciales de las Consejerías.
   b) Las Viceconsejerías.
   c) Las Direcciones Generales.
   d) Los Gabinetes encargados de la asistencia política y técnica a los miembros del Consejo de Gobierno.

6. **A tenor de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, los dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha:**
   a) No serán vinculantes, salvo que una ley lo establezca.
   b) Serán vinculantes, salvo que una norma legal o reglamentaria establezca lo contrario.
   c) Serán vinculantes en todo caso.
   d) No serán vinculantes en ningún caso.

7. **Conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la información objeto de publicidad activa a la que se refiere dicha ley, estará disponible a través de:**
   a) La Carpeta Ciudadana.
   b) La Ventana Electrónica de Acceso a la Información (VEAI).
   c) La Sede Electrónica de Información Pública de Castilla-La Mancha.
   d) El Portal de Transparencia.

8. A tenor de la Constitución, ¿cuál de los siguientes derechos y libertades es susceptible de protección ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad?

a) El derecho a la propiedad privada.
b) El derecho a la negociación colectiva laboral.
c) El derecho de huelga.
d) La libertad de empresa.

9. Conforme a la Constitución, ¿cuál de los siguientes derechos es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?

a) El derecho de asociación.
b) El derecho a la herencia.
c) El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
d) El derecho a una vivienda digna.

10. Según la Constitución, la delegación legislativa de las Cortes Generales por la que se atribuya al Gobierno la potestad de refundir varios textos legales en uno solo deberá otorgarse mediante una:

a) Ley orgánica.
b) Ley ordinaria.
c) Ley de bases.
d) Ley de armonización.

11. ¿Cuál de los siguientes elementos aparece relacionado en el artículo 10 de la Constitución entre los que constituyen el fundamento del orden político y de la paz social?

a) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
b) La dignidad de la persona.
c) La justicia del orden económico y social.
d) La división de poderes.

12. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución ¿el Estado puede aprobar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas?

a) No, en ningún caso, por ser contrario al orden constitucional de distribución de competencias.
b) Si, cuando así lo exija el interés general y su necesidad sea apreciada por mayoría absoluta del Congreso y mayoría simple del Senado.
c) Si, cuando así lo exija el interés general y su necesidad sea apreciada por mayoría simple del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
d) Si, cuando así lo exija el interés general y su necesidad sea apreciada por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras que integran las Cortes Generales.

13. Las sesiones conjuntas del Congreso de los Diputados y del Senado:

a) Serán presididas por la persona que ostente la Presidencia del Congreso de los Diputados y se regirán por el Reglamento del Congreso.
b) Serán presididas por la persona que ostente la Presidencia del Senado y se regirán por el Reglamento del Senado.
c) Serán presididas por la persona que ostente la Presidencia del Senado y se regirán por el Reglamento del Congreso de los Diputados.
d) Serán presididas por la persona que ostente la Presidencia del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

14. ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional se nombran por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial?:

a) Dos.
b) Cuatro.
c) Seis.
d) Doce.

15. Indique quién dispone de legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley ante el Tribunal Constitucional:

a) Treinta senadores.
b) El Ministerio Fiscal.
c) El Defensor del Pueblo.
d) El Consejo General del Poder Judicial.

16. La reforma de la Constitución:

a) No podrá iniciarse durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio.
b) Podrá iniciarse durante la vigencia del estado de alarma, pero no durante la vigencia de los estados de excepción o de sitio.
c) Podrá iniciarse durante la vigencia de los estados de alarma o excepción, pero no durante la vigencia del estado de sitio.
d) Podrá iniciarse durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio, siempre que la iniciativa sea aprobada por mayoría absoluta del Congreso y del Senado.

17. El Consejo General del Poder Judicial está integrado por la persona que ostente la Presidencia del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por:

a) Doce miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.
b) Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
c) Doce miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.
d) Veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cuatro años.

18. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes afirmaciones, relativas a la representación ante las Administraciones Públicas, es correcta:

a) Las personas físicas son las únicas que pueden actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.
b) La representación ante las Administraciones Públicas no se presume nunca y deberá acreditarse en todo caso.
c) La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
d) La falta o insuficiencia de la acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, no siendo posible su subsanación.

19. A tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al menos están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas en los procedimientos administrativos:

a) Las personas físicas, salvo que acrediten que no tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
b) Quienes actúen en representación de un interesado, aunque este último no esté obligado a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.
c) Los empleados públicos para cualquier actuación que realicen ante las Administraciones Públicas.
d) Las entidades sin personalidad jurídica.

20. La recusación de las autoridades o el personal de las Administraciones Públicas que intervengan en el procedimiento administrativo:

a) Conllevará la suspensión del transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución, desde que se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
b) Solo conllevará la suspensión del transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución en los procedimientos sancionadores.
c) Solo conllevará la suspensión del transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución en los procedimientos sancionadores y de concurrencia competitiva.
d) No conllevará la suspensión del transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución, sin perjuicio de la obligación del recusado de abstenerse de intervenir en el mismo cuando aprecie la concurrencia de causa de abstención.

21. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos por los que se resuelvan las solicitudes de práctica de pruebas formuladas por los interesados, cualquiera que sea el sentido de la resolución.
b) Los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos.
c) Los actos que resuelvan los recursos administrativos, salvo que declaren su inadmisión.
d) Los actos que se dicten en ejercicio de potestades regladas, cualquiera que su alcance y efectos.

22. El defecto de forma de los actos administrativos:

a) Conllevará su nulidad de pleno derecho cuando sea consecuencia de una infracción del ordenamiento jurídico constitutiva de desviación de poder.
b) Determinará en todo caso su anulabilidad.
c) Determinará su anulabilidad cuando suponga que el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin.
d) Conllevará su nulidad de pleno derecho cuando dé lugar a indefensión de los interesados.

23. ¿Puede iniciarse de oficio por la Administración pública un procedimiento de responsabilidad patrimonial?:

a) Sí, pero únicamente cuando el derecho a la indemnización derive de la anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto administrativo o disposición de carácter general.
b) Sí, aunque haya prescrito el derecho a reclamar del interesado.
c) Sí, siempre que no haya prescrito el derecho a reclamar del interesado.
d) No, los procedimientos de responsabilidad patrimonial solo pueden iniciarse a instancia de parte.

24. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, relativas a la caducidad del procedimiento administrativo, es correcta?:

a) Los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.
b) Podrá acordarse la caducidad por la inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites aun cuando estos últimos no sean indispensables para dictar resolución.
c) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
d) La caducidad conllevará la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.

25. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, remite los términos en que pueden adoptarse las medidas provisionales que relaciona a lo dispuesto en:

a) El Código Civil.
b) La Ley de Enjuiciamiento Civil.
c) La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
d) La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

26. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes, relativas al inicio de los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, es correcta?:

a) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio o a instancia de parte.
b) Los procedimientos de naturaleza sancionadora no podrán ser iniciados como consecuencia de orden superior.
c) Cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior.
d) Podrán iniciarse nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos tipificados como infracción en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, siempre que haya recaído una primera resolución sancionadora, aun cuando esta última no resulte ejecutiva.

27. A tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada contra los actos administrativos expresos será de:

a) Quince días hábiles.
b) Treinta días hábiles.
c) Un mes.
d) Dos meses.

28. Según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los principios de buena regulación en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria se incluyen los siguientes:

a) Los principios de necesidad, eficiencia y transparencia.
b) Los principios de eficacia, oportunidad y seguridad jurídica.
c) Los principios de congruencia, eficacia y transparencia.
d) Los principios de simplificación, oportunidad y proporcionalidad.

29. De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las decisiones que adopten las Conferencias Sectoriales cuando supongan un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias, de obligado cumplimiento y directamente exigible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, adoptarán la forma de:

a) Acuerdo.
b) Convenio.
c) Protocolo General.
d) Tratado.

30. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, relativas a la competencia, es correcta?:

a) La encomienda de gestión conlleva la alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio.
b) No podrán delegarse, sin salvedad alguna, las competencias que se ejerzan por delegación.
c) El acuerdo de avocación de la competencia por el órgano superior jerárquico no requiere de motivación.
d) La competencia para dictar disposiciones de carácter general no puede ser objeto de delegación en ningún caso.

31. El plazo de prescripción de la acción para reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas derivada de daños de carácter físico a las personas es de:

a) Cuatro años a contar desde la producción del hecho lesivo.
b) Cuatro años a contar desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
c) Un año a contar desde la producción del hecho lesivo.
d) Un año a contar desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

32. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de naturaleza privada, su responsabilidad se exigirá:

a) De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
b) Únicamente de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil en materia de responsabilidad extracontractual, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
c) Únicamente de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil en materia de responsabilidad contractual, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
d) De conformidad con lo dispuesto en el Código Civil en materia de responsabilidad contractual o extracontractual, en función de la concurrencia o no de contrato, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

33. Las Administraciones Públicas pueden revocar sus actos desfavorables o de gravamen:

a) En cualquier momento y sin limitación alguna.
b) Con la sola limitación de que no haya transcurrido el plazo de prescripción.
c) Siempre que, entre otras limitaciones, tal revocación no sea contraria al principio de igualdad.
d) Únicamente cuando dichos actos sean consecuencia de errores materiales, aritméticos o de hecho.

34. A tenor de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes afirmaciones, relativas al cómputo de plazos, es correcta:

a) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
b) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, se considerará hábil en todo caso.
c) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo únicamente los domingos y los declarados festivos.
d) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, se deberá hacer constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

35. Los convenios suscritos por las Administraciones Públicas deberán ser remitidos al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma que corresponda:

a) Dentro del mes siguiente a su suscripción y cuando los compromisos económicos asumidos superen los 60.000 euros.
b) Dentro de los tres meses siguientes a su suscripción y cuando los compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros.
c) Dentro de los tres meses siguientes a su suscripción y cuando los compromisos económicos asumidos superen los 60.000 euros
d) Dentro del mes siguiente a su suscripción y cuando los compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros.

36. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad patrimonial en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular:

a) En todo caso, de forma mancomunada.
b) En todo caso, de forma solidaria.
c) De forma mancomunada, salvo acuerdo en contrario de las Administraciones intervinientes.
d) De forma solidaria, salvo acuerdo en contrario de las Administraciones intervinientes.

37. Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando las leyes no establezcan el plazo de prescripción de las sanciones administrativas, las impuestas por faltas leves prescribirán en el plazo de:

a) Un mes.
b) Tres meses.
c) Seis meses.
d) Un año.

38. Señale cuál de entre los siguientes criterios, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, resulta prioritario para determinar la adscripción de los consorcios del sector público a una determinada Administración Pública:

a) Ostentar el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
b) Tener facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.
c) Disponer de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
d) Financiar en más de un cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio.

39. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el plazo para interponer el recurso de lesividad por las Administraciones Públicas contra sus actos anulables que sean favorables para los interesados, es de:

a) Dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad para el interés público.
b) Dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que se notifique a los interesados la declaración de lesividad para el interés público.
c) Seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad para el interés público.
d) Seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en que se notifique a los interesados la declaración de lesividad para el interés público.

40. Indique cuál de las siguientes afirmaciones, relativas a la representación y defensa de las partes ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es correcta:

a) En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y estar asistidas por Abogado.
b) La representación ante órganos colegiados solo podrá conferirse mediante comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia correspondiente.
c) Los funcionarios públicos podrán comparecer, por sí mismos, en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
d) Los empleados públicos podrán comparecer, por sí mismos, en defensa de sus derechos, se refieran a cuestiones de personal o a cualesquiera otras derivadas de su relación con las Administraciones Públicas.

41. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tienen la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada:

a) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.000.000 de euros.
b) Los contratos de concesión de servicios cualquiera que sea su cuantía.
c) Los contratos de concesión de obras cualquiera que sea su cuantía.
d) Los contratos de suministros cuyo valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros.

42. Conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores:

a) Los contratos de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros.
b) Los contratos de concesión de obras de valor estimado inferior a 50.000 euros.
c) Los contratos de concesión de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros.
d) Los contratos de servicios de valor estimado inferior a 18.000 euros.

43. A tenor de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a efectos de elaborar los correspondientes proyectos, las obras que tengan por objeto enmendar el menoscabo en el tiempo producido en un inmueble por el natural uso del mismo se clasifican como:

a) Obras de reparación.
b) Obras conservación.
c) Obras de rehabilitación.
d) Obras de restauración.

44. A tenor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿las entidades del sector público pueden contratar verbalmente?:

a) Solo en el caso de los contratos menores.
b) No, salvo que el contrato sea objeto de tramitación urgente.
c) No, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.
d) No, en ningún caso.

45. De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de:

a) Concesión directa.
b) Concurrencia competitiva.
c) Simplificado de concurrencia.
d) Concesión simplificada.

46. En el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro de subvenciones será de:

a) Un mes, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) Tres meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
c) Seis meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
d) Doce meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

47. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, declarada la utilidad pública o el interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado, la obligación de formular una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación recae sobre:

a) Los titulares de los bienes o derechos expropiados.
b) El beneficiario de la expropiación.
c) La Administración expropiante.
d) El Jurado Provincial de Expropiación.

48. Indique cuál de las siguientes afirmaciones, relativas al personal eventual al servicio de las Administraciones Públicas, es correcta:

a) Al personal eventual le será de aplicación, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
b) La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la función pública cuando así esté previsto en las leyes autonómicas sobre empleo público.
c) La condición de personal eventual podrá constituir mérito para la promoción interna únicamente cuando así este previsto en las bases reguladoras de las respectivas convocatorias.
d) Su relación de servicios queda sujeta a la legislación laboral, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

49. La Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, es de aplicación:

a) Únicamente al personal funcionario de carrera.
b) Únicamente al personal funcionario de carrera o interino.
c) Únicamente al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal eventual.
d) Al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal eventual y al personal laboral.

50. Según la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, las retribuciones básicas del personal funcionario de carrera están integradas, única y exclusivamente, por:

a) El sueldo.
b) El sueldo y los trienios.
c) El sueldo, los trienios y el complemento de carrera.
d) El suelo, los trienios, el complemento de carrera y el complemento de puesto de trabajo.

51. A tenor de lo dispuesto en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales está reservado en exclusiva:

a) Al personal directivo profesional.
b) Al personal funcionario de carrera.
c) Al personal funcionario.
d) Al personal funcionario y al personal directivo profesional, aun cuando este último carezca de la condición de personal funcionario.

52. Indique cuál de las siguientes conductas se encuentra tipificada como falta disciplinaria muy grave en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha:

a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.
b) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
c) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo.

53. A tenor de lo dispuesto en las normas reguladoras de la estructura y competencias de los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las competencias en materia de vivienda están residenciadas en:

a) La Consejería de Fomento.
b) La Consejería de Desarrollo Sostenible.
c) La Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
d) La Consejería de Vivienda.

Respuesta correcta: a) Decreto 109/2023, de Estrc y Fun. Cons. Fomento

54. ¿Cuál de las siguientes entidades del sector público regional tiene naturaleza jurídica de organismo autónomo?:

a) El Instituto de la Mujer de Castilla-La Macha.
b) El Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha.
c) El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
d) El Jurado Regional de Valoraciones.

55. Conforme a la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, el instrumento que determina el conjunto de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, tanto las que vienen reconocidas en la propia Ley, como aquellas otras que sean necesarias para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales que pudieran acontecer, es el:

a) Mapa de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
b) Repertorio de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
c) Índice de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
d) Catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.

56. De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la prestación laboral a cargo del trabajador es:

a) Voluntaria y por cuenta propia.
b) Obligatoria y por cuenta propia.
c) Obligatoria y por cuenta ajena.
d) Voluntaria y por cuenta ajena.

57. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

a) Prohíbe que los menores de dieciocho años realicen trabajos nocturnos u horas extraordinarias.
b) Permite que los menores de dieciocho años realicen horas extraordinarias, pero prohíbe que realicen trabajos nocturnos.
c) Permite que los menores de dieciocho años realicen trabajos nocturnos, pero prohíbe que realicen horas extraordinarias.
d) Permite que los menores de dieciocho años realicen trabajos nocturnos y horas extraordinarias, siempre que medie autorización expresa de la autoridad laboral.

58. Conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se considerará salario:

a) Las cantidades percibidas por los trabajadores en concepto de suplidos por los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral.
b) Las indemnizaciones percibidas por traslados.
c) Las percepciones económicas de los trabajadores recibidas en especie.
d) Las prestaciones de la Seguridad Social.

59. Siguiendo lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, indique cuál de las siguientes afirmaciones, relativas al salario mínimo interprofesional, es correcta:

a) Se fija anualmente por las Cortes Generales.
b) Su revisión afectará en todo caso a la estructura de los salarios profesionales, cualquiera que fuese la cuantía de estos últimos.
c) En su cuantía, tanto anual como mensual, es inembargable.
d) En su fijación se tendrá en cuenta únicamente el índice de precios al consumo, la productividad media nacional y el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.

60. A tenor de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, indique cuál de las afirmaciones siguientes, relativas a la jornada de trabajo, es correcta:

a) El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser en ningún caso superior a ocho diarias.
b) Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a veinte minutos.
c) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas.
d) La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y ocho horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

61. La duración máxima, a jornada completa, del permiso parental previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores será de:

a) Cuatro semanas.
b) Ocho semanas.
c) Doce semanas.
d) Dieciséis semanas.

62. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando el despido del trabajador sea declarado improcedente y el empresario opte por la indemnización, la cuantía de esta última será:

a) Equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
b) Equivalente a cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
c) Equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades.
d) Equivalente a cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades.

63. Conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación:
a) Es imprescriptible.
b) Prescribirá a los cuatro años.
c) Prescribirá a los cinco años.
d) Prescribirá a los diez años.

64. Las sociedades de capital en las que el capital está dividido en participaciones sociales y se integra por las aportaciones de todos los socios, quienes no responden personalmente de las deudas sociales, se denominan:
a) Sociedades colectivas.
b) Sociedades anónimas.
c) Sociedades de responsabilidad limitada.
d) Sociedades comanditarias por acciones.

65. Según dispone el Código Civil, en relación con el pago de las obligaciones:
a) El pago solo puede llevarse a cabo por el deudor o sus causahabientes.
b) Puede hacer el pago cualquier persona con interés en el cumplimiento de la obligación, siempre que dicho pago sea aprobado por el deudor.
c) Puede hacer el pago cualquier persona, lo apruebe o no el deudor, siempre que aquélla tenga interés en el cumplimiento de la obligación.
d) Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe o ya lo ignore el deudor.

66. Conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, ¿es posible transigir judicial o extrajudicialmente sobre sobre los derechos de la hacienda pública de Castilla-La Mancha?:
a) No, en ningún caso.
b) Solo excepcionalmente y previa autorización de las Cortes de Castilla-La Mancha mediante Ley.
c) Sí, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, previo dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha
d) Si, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y sin necesidad de dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

67. La clasificación del estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que agrupa los créditos separando los gastos corrientes de los gastos de capital, es la clasificación:
a) Orgánica.
b) Funcional.
c) Estratégica.
d) Económica.

68. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, la fase de gestión del presupuesto de gastos en la que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública regional y que comporta la propuesta de pago correspondiente, se denomina:
a) Aprobación del gasto.
b) Disposición del gasto.
c) Reconocimiento de la obligación.
d) Ordenación del pago.

69. El capítulo 5 de la clasificación económica del estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, corresponde a:
a) Ingresos patrimoniales.
b) Impuestos indirectos.
c) Tasas, precios públicos y otros ingresos.
d) Enajenación de inversiones reales.

70. El órgano colegiado de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente para conocer y resolver los recursos y reclamaciones de naturaleza económico-administrativa sobre actos de gestión de impuestos propios, se denomina:
a) Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha.
b) Junta Económico-Administrativa de Castilla-La Mancha
c) Comisión Superior de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
d) Jurado Regional de Tributos de Castilla-La Mancha.

71. Según la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, son recurribles en suplicación las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los siguientes procesos:

a) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social.
b) En procesos de impugnación de alta médica cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador.
c) En procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones.
d) En procesos sobre reclamaciones cuya cuantía litigiosa exceda de 1.000 euros

72. Según el Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, las Instrucciones Técnicas del Planeamiento tienen por objeto, entre otros, el siguiente:

a) El diseño de guías y elementos para la ejecución de obras de urbanización.
b) La elaboración de modelos de normas urbanísticas y ordenanzas tipo para regular la edificación y usos del suelo.
c) La precisión de los conceptos de urbanización y edificación.
d) La concreción y, en su caso, el aumento de los estándares mínimos de suelo para dotaciones públicas.

73. Los acuerdos de fijación del justiprecio adoptados por el Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

a) Son susceptibles de recurso alzada ante el órgano competente de la Administración expropiante.
b) Son susceptibles de recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda cuando la expropiación se lleve a cabo por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Únicamente pondrán fin a la vía administrativa cuando la expropiación de lleve a cabo por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
d) Pondrán fin a la vía administrativa cuando la Administración expropiante sea la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o cualquiera de las Diputaciones o los Municipios de la Región.

74. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los candidatos propuestos por el Senado para su nombramiento como Magistrados del Tribunal Constitucional, serán elegidos entre las candidaturas presentadas por:

a) Las asociaciones profesionales de Jueces, Magistrados y Fiscales, más representativas a nivel nacional.
b) Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
c) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
d) Las personas titulares de la Presidencia de las Comunidades Autónomas.

75. En la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la aprobación de los Planes Estratégicos de Subvenciones corresponde a:

a) El Consejo de Gobierno.
b) La persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda.
c) Las personas titulares de las Consejerías responsables de su ejecución.
d) La Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.